



Al momento, la JP realiza "el proceso administrativo correspondiente" para sancionar la actuación del profesional autorizado que otorgó el permiso para una construcción en Bahía de Jobsos. archivo

BAHÍA DE JOBOS

# Apelativo ratifica nulidad de permiso

Con su dictamen, el foro intermedio validó el proceso de auditoría realizado por la Junta de Planificación en torno al documento

El Tribunal de Apelaciones determinó que el permiso de uso otorgado por un profesional autorizado para una construcción en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobsos, en Salinas, es nulo, validando así el proceso de auditoría realizado por la Junta de Planificación, informó ayer, el presidente de esa agencia, **Julio Lassús Ruiz**.

En su dictamen, el Apelativo analizó todos los documentos del expediente administrativo, tanto de la Oficina de Gerencia de Permisos como de la Junta. Determinó que, como estableció la Junta en su reso-

lución del pasado 30 de agosto, el permiso de uso en cuestión era nulo, ya que no se otorgó conforme a las leyes y los reglamentos aplicables, explicó Lassús Ruiz.

"La Junta actuó de manera razonable y dentro del marco de los poderes que se le han sido delegados", dijo el planificador en un comunicado de prensa.

El foro intermedio dictó, el miércoles, una resolución en la que reiteró la sentencia emitida, el pasado 30 de noviembre, en el caso "Ing. Ángel Rodríguez Sánchez v. Junta de Planificación". Con su determinación, el Apelativo validó el pro-

ceso de auditoría realizado por la Junta el 30 de agosto. Dicha auditoría resolvió que el permiso de uso otorgado por el ingeniero Ángel Rodríguez Sánchez, como profesional autorizado, no procedía.

"El Tribunal de Apelaciones expresó que la determinación emitida por la Junta de Planificación fue correcta y que el ingeniero Rodríguez Sánchez no aportó evidencia suficiente para derrotar la presunción de corrección que caracteriza la decisión del foro administrativo", destacó Lassús Ruiz.

"El tribunal discutió varias de las deficiencias encontradas en el proceso de otorgamiento del Permiso de Uso Núm. 2019-279203-PUS-065158, incluyendo el hecho de que las obras cubiertas por el permiso no podían ser aprobadas por un profesional autorizado, ya que el 98% del predio del

terreno objeto del permiso ubica en una zona costanera clasificada como Distrito de Preservación de Recurso sobre la cual no se permitirá construcción alguna, salvo aquellas relacionadas con estudios científicos. Por tanto, el profesional autorizado falló en la función de aprobar un permiso en una zona restringida", explicó el funcionario.

La auditoría efectuada por la Junta se inició mediante una solicitud por parte del Consorcio CCVS, luego de haber identificado varias inconsistencias respecto al permiso expedido. El Consorcio CCVS es la entidad con jurisdicción sobre los permisos concernientes a Salinas, en virtud del Convenio de Transferencia de Facultades.

Por último, Lassús Ruiz se mostró complacido con el dictamen del Apelativo, e indicó que "lo resuelto por el tribunal valida los procesos de fiscalización y auditoría que continuamente realiza la Junta de Planificación".

"Luego de esta determinación judicial, el Consorcio CCVS deberá solicitar ante el Tribunal de Primera Instancia la revocación del permiso de uso. Al presente, la Junta de Planificación está llevando a cabo el proceso administrativo correspondiente para sancionar la actuación del profesional autorizado", subrayó.

## Asignan FEI contra alcalde de Hatillo

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) asignó un fiscal especial contra el alcalde de Hatillo, **Carlos Román Román**, y su oficial de prensa, **José Padilla Romero**, por presuntamente utilizar instalaciones del ayuntamiento y empleados municipales para grabar un video para una campaña política.

Las supuestas violaciones habrían ocurrido en el marco de la campaña que efectuaba Román Román cuando era alcalde interino para la elección que se celebraría en mayo de 2022.

El esquema fue denunciado mediante una querrela que refirió el secretario de Justicia, **Domingo Emanuelli Hernández**, a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia.

"Como resultado de su investigación preliminar, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde Román Román y el coautor José Daniel Padilla incurrieron en posible conducta delictiva tipificada en los artículos 5.012 y 13.000 de la Ley 222-2011, conocida como Ley para la Fiscalización de Campañas Políticas en Puerto Rico", reza un comunicado de la Opfei divulgado ayer.

"Habiendo realizado un minucioso y ponderado análisis del informe preliminar del Departamento de Justicia, así como de la prueba recopilada que acompaña dicho informe y el derecho aplicable, hemos determinado acoger la recomendación del secretario de Justicia", establece la resolución del Panel del FEI, según el parte de prensa.

Los fiscales que tendrán a cargo la investigación, por un plazo de 90 días, son Manuel Núñez Corrada, como fiscal especial independiente, y Zulma Fúster Troche, como fiscal delegada.



Román Román, en la foto, fue electo alcalde, el 1 de mayo de 2022, tras la renuncia de José "Chely" Rodríguez.